

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE TOLEDO

Depósito Legal: TO - 1 - 1958

Franqueo Concertado: Núm. 45/2

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA-LA MANCHA**SECRETARÍA GENERAL****COMISIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA****Resolución de insostenibilidad 30661**

Por la presente le comunico que en su reunión de fecha viernes, 11 de enero de 2013, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la provincia de Toledo ha dictado la siguiente resolución:

Con fecha 26 de marzo de 2010, se recibió en esta Comisión, solicitud de asistencia jurídica gratuita presentada por José Miguel Martínez Martínez, con N.I.F. número 04569752C, y domicilio en Apartados de Correos, número 43, 45220-Yeles (Toledo), para la presentación de un procedimiento monitorio (cuantía 9.327,44), número de autos 84 de 2009, seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Illescas.

El día 15 de abril de 2010 Sara Palomares Camacho a través del Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Toledo presenta escrito manifestando la insostenibilidad de la pretensión de José Miguel Martínez Martínez.

Esta Comisión tras el estudio del expediente y a la vista de los informes remitidos por el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Toledo el 2 de septiembre de 2011 y por la Fiscalía Provincial el 7 de noviembre de 2012, acuerda declarar la insostenibilidad de la pretensión deducida por José Miguel Martínez Martínez.

Esta resolución puede ser impugnada por escrito, de forma motivada, y sin necesidad de intervención de Letrado, en el plazo de cinco días hábiles (excluyendo del cómputo los festivos) desde su notificación o, en su defecto, desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para interponerla, ante la Secretaría de esta Comisión, sita en esta Delegación del Gobierno, siendo en ese caso remitida para su resolución junto con todo el expediente correspondiente a la resolución impugnada, y una certificación de ésta, al Juzgado o Tribunal competente o al Juez Decano para su reparto, si el procedimiento no se hubiera iniciado, teniendo en cuenta que éstos pueden imponer a quien hubiera impugnado de manera temeraria o con abuso de derecho, una sanción pecuniaria de 30,00 a 300,00 euros (artículo 20 de la Ley 1 de 1996).

Toledo 16 de enero de 2013.—El Secretario, Francisco Javier Acitores Durán.

N.º I.-4567